



Consejo de Seguridad

Distr. general
3 de septiembre de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 9 de septiembre de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Le escribo en relación con mi carta de 5 de junio de 2002 (S/2002/631).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe adjunto, presentado por Luxemburgo en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien distribuir el texto de la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**

Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Carta de fecha 21 de agosto de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente de Luxemburgo ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de referirme a su carta de 28 de mayo de 2002 por la que transmitió una serie de preguntas que el Comité contra el Terrorismo formula a las autoridades de mi país a fin de completar el informe del Gobierno de Luxemburgo presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.

En respuesta a esa carta, me complace presentar el informe complementario del Gran Ducado de Luxemburgo, de fecha 20 de agosto de 2002, presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice).

(Firmado) Hubert **Wurth**
Embajador

Apéndice

Gran Ducado de Luxemburgo: informe complementario de fecha 20 de agosto de 2002 presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Apartado a) del párrafo 1

- *¿Dispone Luxemburgo de legislación relativa a las redes bancarias no estructuradas? Sírvase indicarlo en líneas generales.*

Luxemburgo no dispone de legislación especial sobre las redes bancarias no estructuradas. No obstante, las autoridades luxemburguesas competentes consideran que esas redes entran en el ámbito de las leyes relativas al sector bancario, de forma que están sujetas a todas las obligaciones y controles previstos por la legislación en la materia.

Para una información más amplia al respecto, véanse las explicaciones suministradas con respecto a los apartados a) y c) del párrafo 1.

- *¿Se ha declarado culpable a alguna persona física o jurídica de no cooperar con las autoridades en relación con procesos entablados por presuntos actos de blanqueo de dinero? En caso afirmativo, ¿qué penas se han impuesto?*

Hasta el momento no se ha declarado culpable a ninguna persona física o jurídica de no cooperar en el marco de los procesos entablados por presuntos actos de blanqueo de dinero.

Con arreglo a la legislación vigente en Luxemburgo, la falta de cooperación y la negativa a cooperar se castigan con una multa de 1.250 a 125.000 euros. Sin embargo, cuando se apliquen los futuros artículos 135-1 a 135-8 y 506-1 del Código Penal, que figuran en el proyecto de ley de 29 de abril de 2002 relativo a la represión del terrorismo y su financiación y a la aprobación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, abierta a la firma en Nueva York el 10 de enero de 2000, tales actos podrán ser castigados con penas de reclusión, según las distinciones establecidas por esos artículos.

- *¿Aparte de los bancos, están obligadas otras personas físicas o jurídicas (por ejemplo, abogados, notarios) a avisar a las autoridades de Luxemburgo de transacciones sospechosas de estar vinculadas a actividades terroristas? En caso afirmativo, ¿qué penas se aplican a las personas que, deliberadamente o por negligencia, no avisan de esas transacciones?*

Con arreglo a la ley de 11 de agosto de 1998, relativa a la incorporación al Código Penal de la incriminación de las organizaciones delictivas y el delito de blanqueo de dinero, todos los profesionales del sector financiero, como las instituciones de crédito, los administradores de bienes, los asesores en operaciones financieras, los corredores de comercio, los depositarios profesionales de valores, los notarios, los asesores de empresa, los expertos en contabilidad, las compañías de seguros y los casinos de juego, están obligados a denunciar operaciones sospechosas.

La falta de cooperación y la negativa a cooperar se castigan, con arreglo a la legislación vigente en Luxemburgo, con una multa de 1.250 a 125.000 euros. No obstante, cuando se apliquen los futuros artículos 135-1 a 135-8 y 506-1 del Código Penal, que figuran en el proyecto de ley de 29 de abril de 2002 relativo a la represión del terrorismo y su financiación y a la aprobación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, abierta a la firma en Nueva York el 10 de enero de 2002, tales actos podrán ser castigados con penas de reclusión, según las distinciones establecidas por esos artículos.

Apartado b) del párrafo 1

- *El Comité contra el Terrorismo observa que Luxemburgo ha concluido las formalidades previstas en su Constitución para ser parte en la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y que se dispone a enmendar su legislación para adaptarla a esa Convención. Sírvese indicar en qué estado se encuentra la preparación de la ley propuesta para tipificar la financiación del terrorismo como distintos delitos.*

Por Decreto granducal de 29 de abril de 2002, se autorizó al Ministro de Justicia a presentar ante la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo el proyecto de ley relativo a la represión del terrorismo y su financiación y a la aprobación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, abierta a la firma en Nueva York el 10 de enero de 2000.

Ese proyecto de ley fue presentado al Consejo de Estado para que emitiera su opinión, que se dará a conocer posiblemente en noviembre de 2002, tras lo cual el proyecto será examinado por la comisión competente de la Cámara de Diputados.

Apartado c) del párrafo 1

- *Independientemente de la reglamentación europea directamente aplicable a la congelación de fondos, ¿dispone Luxemburgo de textos que le permitirían congelar fondos que pertenezcan a individuos asociados a actividades terroristas?*

Cabe mencionar en primer lugar que, con arreglo a las normas de procedimiento penal de derecho común, es posible efectuar pesquisas y proceder a confiscar objetos y efectos que hayan servido para cometer delitos o estén destinados a ello. Dichas pesquisas y confiscaciones se llevan a cabo sobre la base de una petición de asistencia judicial formulada por otro Estado o cuando, a petición del Ministerio Fiscal, se inicia una acción judicial en Luxemburgo.

Además de los textos comunitarios directamente aplicables, Luxemburgo dispone de textos jurídicos que permiten bloquear fondos dentro de los límites establecidos por la legislación europea. Nos referimos en particular al Decreto granducal de 10 de noviembre de 1944, relativo al control de los cambios, y a la Ley de 21 de diciembre de 2001, relativa a la habilitación al Gran Ducado para reglamentar determinadas materias. Esta ley de habilitación se renueva cada año.

Por otra parte, se prevé revisar la legislación luxemburguesa relativa a la congelación de fondos y activos una vez que se apruebe en el seno de la Unión Europea el proyecto de decisión marco relativo a esa cuestión.

Cabe añadir que el mecanismo jurídico existente en materia de blanqueo de dinero, al que están sujetos todos los profesionales del sector financiero, prevé reglas semejantes a las de la congelación de activos propiamente dicha.

En el marco de esas disposiciones y en aplicación del artículo 40 de la Ley de 5 de abril de 1993, relativa al sector financiero, las instituciones crediticias y los demás profesionales del sector financiero están obligados a proporcionar una respuesta y una cooperación lo más completas posible a toda petición legal que, dentro de su competencia, les hagan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Esas mismas personas deben también abstenerse de llevar a término la transacción que sepan o sospechen que tenga que ver con el blanqueo de dinero antes de informar al Procurador del Estado, quien puede dar órdenes de que no se lleve a cabo la transacción. En el caso en que se sospeche que la transacción de que se trate puede dar lugar a una operación de blanqueo de dinero y tal abstención no sea posible o puede impedir el enjuiciamiento de los beneficiarios de una operación que se sospeche que está relacionada con el blanqueo de dinero, las instituciones y los demás profesionales interesados podrán llevar a cabo la transacción, pero deberán informar inmediatamente después al Procurador del Estado.

Cabe añadir también que las instituciones crediticias y los demás profesionales del sector financiero, sus jefes y empleados no pueden comunicar al cliente interesado ni a terceras personas que se ha transmitido información a las autoridades o que está en marcha una investigación sobre blanqueo de dinero.

Con arreglo a la legislación vigente en Luxemburgo, el delito de blanqueo de dinero guarda relación, por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, con los delitos primarios de asociación criminal de malhechores, corrupción y tráfico de armas.

Sin embargo, el proyecto de ley de 29 de abril de 2002, relativo a la represión del terrorismo y su financiación y a la aprobación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, tiene por objeto extender expresamente las obligaciones profesionales en materia de blanqueo de dinero a todos los delitos de terrorismo propiamente dicho que introducirá esa ley.

Apartado d) del párrafo 1

- *¿Cómo permite asegurar el sistema de control de las transacciones financieras que los fondos recibidos por las asociaciones no sean desviados de su objetivo indicado para financiar actividades terroristas?*

En virtud de la ley modificada de 21 de abril de 1928, sobre asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, la constitución de una fundación debe ser aprobada por Decreto granducal. A ese efecto, se procede a la verificación de los estatutos de la fundación de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 21 de abril de 1928 antes mencionada.

Cabe añadir también que las donaciones en vida y testamentarias a una fundación que tengan un monto superior a 12.500 euros deben ser aprobadas y que las fundaciones deben comunicar cada año al Ministro de Justicia sus cuentas anuales y su presupuesto en los dos meses del cierre del ejercicio.

Teniendo en cuenta que las transacciones financieras de las asociaciones y fundaciones sólo pueden ser realizadas por instituciones bancarias legalmente establecidas en el Gran Ducado de Luxemburgo, dichas transacciones están sometidas al mismo régimen que todas las demás transacciones financieras realizadas por esas instituciones y, por lo tanto, deben respetar en particular los principios del “know your customer” y de la denuncia de las operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de dinero.

Sobre la base del artículo 18 de la ley de 21 de abril de 1928 antes mencionada, el Ministerio Público puede también pedir la disolución de una asociación cuando ésta afecte su patrimonio a fines distintos de aquéllos para los que fue constituida o que contravendrían la ley o el orden público.

Apartado a) del párrafo 2

- *Para que la compraventa de armas en Luxemburgo sea legal, ¿está sujeta a la posesión de una licencia? ¿Existen disposiciones jurídicas por las que se prohíba el tráfico o el corretaje de armas en beneficio de los terroristas y de sus organizaciones?*

En el Gran Ducado de Luxemburgo, la adquisición, la importación, el transporte, la tenencia, la venta y la cesión de armas de fuego están sujetas a una autorización del Ministro de Justicia en cumplimiento de la Ley de 15 de marzo de 1983 sobre armas y municiones. Asimismo, los comerciantes de armas establecidos legalmente en Luxemburgo están obligados a no vender ni entregar armas de fuego a particulares salvo si poseen la autorización antes mencionada. Por otra parte, la importación y la exportación de armas y municiones requieren una licencia particular otorgada por las autoridades competentes de Luxemburgo.

Dado que el comercio de armas está sujeto a la concesión de licencias que sólo se otorgan tras una verificación de los antecedentes de los solicitantes y que el comercio de armas con particulares o sociedades que no disponen de las licencias requeridas está prohibido y penalizado, no existe una disposición específica en la legislación luxemburguesa actual por la que se prohíba el comercio de armas con organizaciones terroristas.

Apartado e) del párrafo 2

- *¿Tienen competencia los tribunales de Luxemburgo para conocer de actos delictivos del siguiente tipo?*
 - *Actos cometidos fuera de Luxemburgo por una persona nacional de Luxemburgo o que resida allí habitualmente (independientemente de que esa persona resida actualmente en Luxemburgo o no);*
 - *Un acto cometido fuera de Luxemburgo por un extranjero que se encuentre actualmente en Luxemburgo.*

Con arreglo al artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, los luxemburgueses que fuera del territorio de Luxemburgo sean declarados culpables de un delito castigado por la legislación luxemburguesa, pueden ser enjuiciados en el Gran Ducado de Luxemburgo.

En virtud del artículo 7 del mismo Código, los extranjeros que sean declarados culpables fuera del territorio del Gran Ducado, por lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, de un delito contra la seguridad del Estado o la seguridad pública, de falsificación de determinados documentos oficiales, de homicidio o de lesiones corporales voluntarias o de un atentado contra la libertad individual cometidos contra un luxemburgués o un ciudadano de un país aliado, podrán ser enjuiciados con arreglo a la legislación luxemburguesa, ya se encuentren en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero, si el Gobierno de Luxemburgo obtiene su extradición.

Por último, el proyecto de ley de 29 de abril de 2002, relativo a la represión del terrorismo y su financiación y a la aprobación de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, pretende introducir en el Código de Procedimiento Penal una disposición con arreglo a la cual toda persona que sea declarada culpable en el extranjero de uno de los delitos de terrorismo, que serán incorporados al Código Penal por el mismo proyecto de ley, podrá ser enjuiciada en el Gran Ducado cuando se presente una solicitud de extradición y no se aplique la extradición al interesado.

Apartado f) del párrafo 2

- *¿Cuál es el plazo legal para atender una solicitud de asistencia judicial en investigaciones o procedimientos penales (que tengan relación con la financiación a actividades terroristas o el apoyo a éstas) y qué tiempo se necesita en la práctica para tramitar tal solicitud en Luxemburgo?*

El derecho luxemburgués no contiene ninguna disposición especial por la que se fije un plazo para atender las solicitudes de asistencia judicial.

Sin embargo, en virtud del artículo 7 de la ley de 8 de agosto de 2000, las cuestiones de asistencia judicial se tratan con carácter urgente y prioritario y la autoridad requerida informa a la que ha formulado la solicitud del estado del procedimiento y de cualquier demora. Los plazos en los que se atienden las peticiones son muy variables y dependen de la envergadura y complejidad de las tareas que se han de realizar para tramitar la solicitud de asistencia judicial formulada.

Apartado c) del párrafo 3

- *¿Con qué países ha concertado Luxemburgo acuerdos bilaterales de extradición y de asistencia jurídica mutua?*

Aparte de los instrumentos jurídicos multilaterales en materia de extradición y asistencia judicial firmados por el Gran Ducado de Luxemburgo en foros internacionales, Luxemburgo ha concertado los siguientes acuerdos bilaterales:

1. Con los Estados Unidos de América, un tratado de extradición el 1º de octubre de 1996 y un tratado de asistencia judicial en materia penal el 13 de marzo de 1997;
2. Con Australia, un tratado de extradición el 23 de abril de 1987 y un tratado de asistencia judicial en materia penal el 24 de octubre de 1988.

Apartado d) del párrafo 3

- *El Comité contra el Terrorismo desea recibir información, en lo relativo a las convenciones y protocolos internacionales relativos al terrorismo, sobre los progresos logrados por Luxemburgo en cuanto a:*
 - *La adhesión a los instrumentos en los cuales no es parte todavía; y*
 - *La aprobación de legislación y la adopción de otras medidas necesarias para aplicar los instrumentos en los que es parte.*

Luxemburgo tiene intención de adherirse a la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 14 de diciembre de 1973).

Se ha iniciado el proceso de aprobación de otros tres instrumentos internacionales. El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 24 de febrero de 1988), fue firmado por Luxemburgo el 18 de mayo de 1989, se recibió la opinión del Consejo de Estado el 8 de noviembre de 2001 y el proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2001.

El Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 15 de diciembre de 1997), que firmó Luxemburgo el 6 de febrero de 1998, se ha presentado al Consejo de Estado para que emita su opinión.

Por último, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada (Nueva York, 15 de noviembre de 2000), fue firmado por Luxemburgo el 14 de diciembre de 2000 y se está elaborando el proyecto de ley para incorporarlo a la legislación nacional.

Por otra parte, las autoridades luxemburguesas estudian la posibilidad de firmar los tres convenios siguientes:

- Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección - Montreal, 1º de marzo de 1991.
- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima - Roma, 10 de marzo de 1988.
- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental - Roma, 10 de marzo de 1988.

Cabe recordar, finalmente, que el proyecto de ley relativo a, entre otras cosas, la aprobación del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 9 de diciembre de 1999) fue presentado a la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2002 (véase *supra*, apartado b) del párrafo 1).

Apartado e) del párrafo 3

- *¿Figuran los delitos contemplados en las convenciones y protocolos relativos a la lucha contra el terrorismo entre los delitos que pueden dar lugar a extradición en los tratados bilaterales concertados por Luxemburgo?*

En cumplimiento del párrafo 1 del artículo 3 de la ley del 20 de junio de 2001, relativa a la extradición, dan lugar a extradición, de manera general, todos los hechos sancionados por la ley luxemburguesa y la ley del Estado que acarreen una pena de privación de libertad de un máximo de por lo menos un año o una pena más severa.

Esta regla general no va en perjuicio de posibles disposiciones concretas de un instrumento jurídico internacional que prevea una pena inferior a un año, como el artículo 2 de la Convención de extradición y asistencia judicial en materia penal concluida por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos, que prevé una pena de seis meses.

Teniendo en cuenta que todos los delitos relacionados con el terrorismo son castigados con penas más severas, los delitos previstos en las convenciones y protocolos relativos a la lucha contra el terrorismo pueden dar lugar a extradición.
